



rio, excluyéndonos y haciéndonos más vulnerables que nunca a los ataques de sectores menos democráticos.

Es cierto que el Gobierno debió "ajustar sus prioridades", pero nuestra sensación es que el Ejecutivo hizo más que eso: en su necesidad de generar un supuesto mínimo de gobernabilidad, el Gobierno se ha acercado de tal manera al poder económico que en muchas ocasiones esto ha significado pasar por encima de la institucionalidad ambiental y de su propio programa. No avanzar no significaba tener que retroceder.

ESTEFANÍA GONZÁLEZ

Subdirectora de Campañas en Greenpeace Andino

La deuda ambiental

Señor Director:

Desde el ambientalismo esperábamos atentamente esta última cuenta pública del Presidente Gabriel Boric. No porque tuviésemos la esperanza de que el Gobierno rectificara el rumbo y lograra un milagroso avance en su programa ambiental en estos últimos 10 meses de gestión, sino porque nos preocupa el daño que se puede seguir haciendo en el período que resta.

Claramente, el milagro no se ha proclamado: los tibios anuncios de avanzar en la implementación de la Ley Marco Cambio Climático o la Estrategia Nacional de Transición Socioecológica Justa no son suficientes, ni generan la certidumbre que necesitan las comunidades.

Pese a que el Presidente aseguró que el Ejecutivo ha debido generar una importante agenda de diálogos (acercando posturas con quienes piensan distinto) para lograr algo de gobernabilidad en este período, eso no ha sido lo que se ha hecho en materia ambiental: lejos de acercar posturas, en estos casi 40 meses de ejercicio el Gobierno ha debilitado los espacios democráticos que se habían creado en la institucionalidad ambiental y ha puesto a la sociedad civil y al movimiento ambientalista en un peligroso escena-